

REPUBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial del Poder Público Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

JUZGADO: Juez Administrativo Oral del Circuito de Cali

PARTE ACCIONANTE.

ACCIONANTE: Juan Sebastián Ávila Mazuera y Otros

IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadanía No. 1.151.947.991.

Correo Electrónico: jsa\_2219@outlook.es

APODERADO PARTE ACTORA.

DIEGO FELIPE CIFUENTES MARMOLEJO

cedula de ciudadanía No. 1'107.047.945 de Cali (Valle)

Tarjeta Profesional de Abogado 208.527 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura

calle 32 # 78-51 - Santiago de Cali

celular 3146047107.

correo [diegofelipecm@hotmail.com](mailto:diegofelipecm@hotmail.com)

PARTE ACCIONADA.

ACCIONADO: Municipio de Santiago de Cali

Notificaciones Judiciales: [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co)

Avenida 2norte #10 - 70 CAM. Cali - Valle del Cauca

ANEXO: Cuaderno original para el juzgado, y los documentos aducidos como pruebas

FOLIOS: 168

Señor:

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI – Reparto -

E. S. D.

Santiago de Cali

**DIEGO FELIPE CIFUENTES MARMOLEJO** Abogado titulado y en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía No. 1'107.047.945 de Cali (Valle) y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 208.527 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de los señores, **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA, MARICEL MAZUERA JARAMILLO, JULIANA CESPEDES MAZUERA, CARLOS ENRIQUE AVILA MARTINEZ y ERIKA ALEJANDRA HUERTAS LEGUIZAMO**, de conformidad con los poderes conferidos, acudimos ante esta jurisdicción para impetrar medio de control - demanda de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del C.P.A. y de lo C.A. en contra de **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** entidad pública, representada legalmente por el señor alcalde de la ciudad **JORGE IVAN OSPINA** o por quienes hagan sus veces, mayor de edad y domiciliado en Cali (Valle del Cauca), para que por los medios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con citación y audiencia de la parte demandada, del agente del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica se declare su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de los perjuicios que le ocasionaron al señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** (víctima), mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.151.947.991, debido a las lesiones que sufrieron a causa del mal estado de la malla vía cuando transitaba por la vía pública de la ciudad de Santiago de Cali (Valle).

## OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Con fundamento en el artículo 164 numeral 2 literal i de la ley 1437 de 2011, nos encontramos dentro del término para instaurar la demanda de Reparación Directa.

## DESIGNACION DE LAS PARTES

1. LA PARTE DEMANDANTE. Está compuesta por:

- **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** (víctima), mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.151.947.991.
- **MARICEL MAZUERA JARAMILLO** (madre de la víctima), mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 31.976.673.
- **JULIANA CESPEDES MAZUERA** (hermana de la víctima) menor de edad representada por su señora madre **MARICEL MAZUERA JARAMILLO**.
- **CARLOS ENRIQUE AVILA MARTINEZ** (padre de la víctima), mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 79.415.949.
- **ERIKA ALEJANDRA HUERTAS LEGUIZAMO** (pareja de la víctima), mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.144.181.440.

**Apoderado de la parte demandante.** **DIEGO FELIPE CIFUENTES MARMOLEJO** Abogado titulado y en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía No. 1'107.047.945 de Cali (Valle) y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 208.527 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial.

**2. PARTE DEMANDADA.** Lo es el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** entidad pública, representada legalmente por el señor alcalde de la ciudad **JORGE IVAN OSPINA**, o por quienes hagan sus veces, mayor de edad y domiciliado en Cali (Valle del Cauca).

**3. MINISTERIO PÚBLICO.** Representado por el señor Procurador Judicial delegado ante esta Jurisdicción.

## P R E T E N S I O N E S

**PRIMERA.** Que se declare administrativamente responsable al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, entidad demanda, por los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de las lesiones sufridas por **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, el día 25 de agosto de 2018, cuando transitaba por una de las vías públicas de la ciudad de Santiago de Cali (Valle).

**SEGUNDA** Que como consecuencia de la declaración de la responsabilidad la Entidad convocada reconozca y pague las siguientes sumas de dinero:

### 1. PERJUICIOS MATERIALES

#### 1.1 Lucro cesante consolidad y futuro a favor de:

**JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.151.947.991, se estima un valor de correspondiente a **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS (\$120.000.000)**, o la que resulte debidamente probada como indemnización.

Al señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.151.947.991, se deberá indemnizar por la pérdida de capacidad laboral, razón por la cual se solicita la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS (\$120.000.000)**, como indemnización por los ingresos que dejará de obtener el lesionado durante su vida, como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral generada en el accidente narrado

Para la liquidación de este perjuicio se tendrá en cuenta el ingreso económico del lesionado, su pérdida de capacidad laboral y su expectativa de vida. Igualmente deberán tenerse en cuenta los intereses compensatorios sobre el valor de aquellos que se originen entre la fecha de causación y la de fijación de la indemnización; su pago se hará teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Para la liquidación de estos perjuicios, deberán actualizarse las siguientes fórmulas matemáticas utilizadas por el Honorable Consejo de Estado:

$VP = S \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$

Índice Inicial

Donde los factores equivalen a:

VP Valor Presente

S Suma que se busca actualizar

Índice final Índice de Precios al Consumidor a la fecha del incidente regulador.

Índice Inicial Índice de Precios al Consumidor a la fecha de causación del perjuicio.

La indemnización comprenderá dos periodos:

a. Vencido o consolidado, que se establezca aplicando la fórmula:

$$S = Ra (1+i)^n - 1$$

i

Ra Renta mensual actualizada según la primera fórmula,

i Interés puro o técnico del 6 % mensual o 0.4867 mensual

n Período (número de meses) que comprende la indemnización, que va desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta aquella probable de ejecutoria del auto.

b. Futuro o anticipado, que se halla mediante la fórmula:

$$S = Ra (1+i)^n - 1$$

i(1+i)<sup>n</sup>

S Suma buscada

Ra Renta actualizada

i Interés 6%

n Número de meses a indemnizar (supervivencia – mayoría de edad).

Como el lesionado, por su incapacidad física no pudo realizar labores normales, haciéndose ostensible la merma en su productividad laboral, deberá la entidad demandada responder por este perjuicio.

## 2. PERJUICIOS INMATERIALES.

### 2.1. Perjuicios morales.

La tradicional concepción del daño moral se centra en el daño ocasionado al ámbito efectivo o sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia, sufrimiento, dolor, perturbación espiritual, situaciones, que como se demostrará; se evidenciaron tanto en la afectada como en su cónyuge, hijos y hermanos.

Atendiendo los principios de Reparación Integral y Equidad que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, por lo cual se tasaré así:

A Favor de:

1. **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** (víctima), mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.151.947.991, **La suma de ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes.**
2. **MARICEL MAZUERA JARAMILLO** (madre de la víctima), mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 31.976.673, **La suma de ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes.**
3. **JULIANA CESPEDES MAZUERA** (hermana de la víctima) menor de edad representada por su señora madre **MARICEL MAZUERA JARAMILLO**, **La suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.**
4. **CARLOS ENRIQUE AVILA MARTINEZ** (padre de la víctima), mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 79.415.949, **La suma de ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes.**

5. **ERIKA ALEJANDRA HUERTAS LEGUIZAMO** (pareja de la víctima), mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.144.181.440, **La suma de ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes.**

## 2.2. DAÑO A LA SALUD O FISIOLÓGICO:

El Consejo de Estado en sentencia del día catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), radicación número 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031), actor: Antonio José Vigoya Giraldo y otros, adoptó una nueva tipología de los perjuicios inmateriales que durante años ha venido definiendo, acogiendo “el daño a la salud” como un nuevo concepto que además desplaza toda una clasificación que de los daños inmateriales diferentes al moral se construyó jurisprudencialmente durante años. Sostuvo la Corporación:

*“Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial. En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones. En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.”*

Bajo las consideraciones de las graves lesiones sufridas por **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, tenemos un desmedro en su salud que generó afectaciones psico-físicas que deberán ser reparadas por las instituciones convocadas.

Habida cuenta que **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** Fruto del fatídico suceso, viven momentos de aislamiento y temor por lo ocurrido; el disfrute normal de sus actividades personales cotidianas se han visto manifiestamente limitadas y debido a las intervenciones médicas se ha mermado su integridad psicofísica se tasa el presente perjuicio, en **La suma de ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes** salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de ellos al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

1. **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, lesionado, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.151.947.991. **La suma de ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes**

**TERCERA.** Que a las sumas a que resulte condenado al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, se ordene que el valor de la indemnización se liquide con el ajuste previsto en el artículo 192, inciso 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CUARTA. INDEXACIÓN** - Teniendo en cuenta que en Colombia el dinero no mantiene su poder adquisitivo constante las condenas solicitadas deberán indexarse.

**QUINTA.** Que se ordene al al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** a cumplir con la sentencia en el término indicado en el artículo 192 inciso 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**SEXTA.** Que se condene en costas a las entidades demandadas.

## H E C H O S

1. El señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** (victima), mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.151.947.991, el día 25 de agosto de 2018, aproximadamente a las 11:55 P.M, se encontraba desempeñando sus funciones de repartidor de domicilios para la plataforma Rappi, en su motocicleta de placa ZIZ72D mientras transitaba por la Avenida 3 Norte con calle 23 B avenida las Américas de la ciudad Santiago de Cali (V), cuando sufrió un aparatoso accidente debido al mal estado de la malla vía.

2. El Accidente se generó porque la mencionada calzada de la malla vial contaba con un hueco lo que ocasionó que el señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, al momento de transitar en su motocicleta, perdiera la estabilidad sufriendo un volcamiento y que su humanidad impactara contra el asfalto de la mencionada malla vial causándole fractura triple en el tobillo

3. El señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, después de su caída, fue auxiliado por vecinos, transeúntes y miembros de la estación de policía del sector quienes le brindaron ayuda.

4. Se llamo la intervención de los Agente de Tránsito de la ciudad de Santiago de Cali con el fin de realizar el respectivo informe de tránsito, pero estos nunca llegaron al lugar de los hechos.

5. el día 26 de agosto de 2018, a las 12:02 de la mañana se hizo presente una unidad de paramédicos adscrita a la **CUIDADO DE VIDA S.A.S**, quienes dieron asistencia al señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**.

Para lo cual consignaron en la **Historia clínica 8704** lo siguiente:

**“CAUSA EXT, ORIGEN DE LA ATENCIÓN**

**Accidente de tránsito: X**

**Modo de Consulta:** accidente de transito

**CINEMÁTICA:** volcamiento moto (conductor lesionado)

**DESCRIBA SUS HALLAZGOS:** paciente víctima de accidente de tránsito presenta múltiples traumas por volcamiento en condición de conductor.

**DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:** TX MII a nivel de rodilla y tobillo presenta laceraciones.”

Suscrita por **SANCHEZ C.C 94. 504.631** conductor de la ambulancia

**JOSE LUIS L. C.C 1.144.171.053** paramédico

6.El señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, es trasladado en ambulancia y remitido por urgencias a las instalaciones de la **CLINICA VALLE SALUD S.A – INTERVENCIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S**, de Cali, empresa que se hizo responsable de brindar los servicios médicos correspondientes al lesionado, donde plasma em la historia clínica No. Caso: 102827 que:

“Fecha atención: 26/08/2018

Servicio al que Ingreso: URGENCIAS

**Descripción**

**Motivo de Consulta:** ACCIDENTE DE TRANSITO

### Enfermedad actual

PACIENTE MASCULINO QUIEN INGRESA TRAÍDO EN AMBULANCIA POR PARAMÉDICOS POR PRESENTAR ACCIDENTE DE TRANSITO RECIBIENDO TRAUMA EN CODO IZQUIERDO Y MUÑECA IZQUIERDA + QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO I, TRAUMA EN RODILLA IZQUIERDA, TOBILLO IZQUIERDO Y PIE IZQUIERDO CON POSTERIOR DOLOR, EDEMA Y LIMITACIÓN FUNCIONAL.

Suscrito por el médico tratante Dr. **FREDDY MONCLOU GARZON** – Reg. M. 7637452010

7. El mismo día la médica general **DR. ELIANA TURIZO MORATTO** Reg. M. 27259 plasma en la historia clínica del señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** lo siguiente:

#### “DIAGNOSTICO PRESUNTIVO

S609- TRAUMA SUPERFICIAL DE LA MUÑECA Y DE LA MANO, NO ESPECIFICADO

S500 – CONTUSIÓN DEL CODO

S909 – TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL PIE Y DEL TOBILLO, NO ESPECIFICADO

T290 – QUEMADURAS DE MÚLTIPLES REGIONES, GRADO NO ESPECIFICADO

TRAUMA EN CODO IZQUIERDO + QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO I

TRAUMA EN MUÑECA IZQUIERDA + QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO I

TRAUMA EN RODILLA IZQUIERDA

TRAUMA EN TOBILLO IZQUIERDO

TRAUMA EN PIE IZQUIERDO”

8. El día 26 de agosto de 2018 a las 11:301 A.M, el señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** es tratado por el médico de ortopedia y traumatología **ARTURO JOSE ARAGON** el cual plasma en la historia clínica:

#### “Hallazgos:

EN PIE IZQUIERDO, DOLOR, Y EDEMA MARCADO, DOLOR A MOVILIZACIÓN ACTIVA Y PASIVA, DOLOR QUE LIMITA ARCOS MÓVILES, CON EQUIMOSIS, NEUROVASCULARES SIN ALTERACIONES.

#### Procedimientos realizados:

REDUCCION CERRADA DE FRACTURA DE ASTRAGALO, NAVICULAR Y CUBOIDES DE PIE IZQUIERDO”

9. El día 29 de agosto de 2018 a las 14:30 P.M, el señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** es tratado por el médico ortopedia y traumatología **ARTURO JOSE ARAGON** el cual plasma en la historia clínica:

#### “Dx PreQuirurgico:

LUXOFRACTURA DE CHOPART DEL PIE IZQUIERDO

#### Descripción del Procedimiento:

ANTIBIÓTICO ENDOVENOSO CEFALOTINA 2 GR PACIENTE BAJO ANESTESIA RAQUÍDEA SE REALIZA PREVIA ASEPSIA Y ANTISEPSIA EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SE COLOCA CAMPOS QUIRÚRGICOS ESTÉRILES SE REALIZA ABORDAJE DORSAL CENTRADO EN PIE IZQUIERDO SE DISECA POR PLANOS SE REALIZA DISECCIÓN POR PLANOS SE OBSERVA HALLAZGOS YA DESCRITOS SE EXTRAE MÚLTIPLES CUERPOS LIBRES INTRAARTICULARES DE CABEZA DEL ASTRÁGALO ESCAFOIDES SE REVISAS HEMOSTASIA POSTERIORMENTE SE REALIZA MANIOBRAS DE REDUCCIÓN DE FRACTURA COMPLEJA DE ESCAFOIDES SE FIJA PROVISIONAL CON 1 PIN KIRSHNER POSTERIOR CON 2 TORNILLOS CORTICAL MINIFIX HANS 2.0 MM INTERFRAGMENTARIOS Y SE DESLIZA CON UNA PLACA MINIFIX DE 2.0 RECTA X 6H P6 SE CORTA Y SE PREMOLDES POSTERIORMENTE SE FIJA CON 4 TORNILLOS CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM BAJO CONTROL FLUOROSCOPICO SE OBSERVA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN ADECUADA SE LAVA SE REALIZA POSTERIORMENTE LIGAMENTORRAFIA DE LIGAMENTO TOLONAVICULAR DORSAL CON DOS PUNTOS TRANSOSEO Y DOS TERMINO TERMINAL SE REVISAS HEMOSTASI SE CIERRA POR PLANOS SE INMOVILIZA CON VENDAJE BULTOSO NO COMPLICACIONES”

10. El día 30 de agosto de 2018 la médica general **DR. ELIANA TURIZO MORATTO Reg. M. 27259** ordena la incapacidad al señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** por 30 días de duración desde el día 26 de agosto de 2018 hasta el día 24 de septiembre de 2018.

11. el médico tratante **ALBERTO ANDRES CAMPO GUILLEN** con tarjeta 52533504 adscrito al **CENTRO MEDICO Y REHABILITACIÓN VALLE SALUD** de Cali, expide una nueva incapacidad medica al señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** por 30 días de duración desde el día 25 de septiembre de 2018 hasta el día 24 de octubre de 2018, por el **DIAGNÓSTICO: S927: FRACTURAS MÚLTIPLES DEL PIE.**

12. el médico tratante **ARTURO JOSE ARAGON** con tarjeta 52533504 adscrito al **CENTRO MEDICO Y REHABILITACIÓN VALLE SALUD** de Cali, expide una nueva incapacidad medica al señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** por 30 días de duración desde el día 25 de octubre de 2018 hasta el día 23 de noviembre de 2018, por el **DIAGNÓSTICO: S927: FRACTURAS MÚLTIPLES DEL PIE.**

13. El día 21 de febrero de 2020, el señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, fue intervenido quirúrgicamente en el centro médico **INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S** tal como constan en la historia clínica:

**“Diagnostico**

**S923 FRACTURA DE HUESO DEL TETATARSO**

**REDUCCIÓN ABIERTA MÁS OSTEOSÍNTESIS DE ATRODESIS EN PIE IZQUIERDO**

**21/02/2020 - VÍA 1:**

**REDUCCIÓN ABIERTA MAS OSTEOSÍNTESIS DE LISFRANC DEL 1RA Y 2DA DEL 1ER Y 2DO MTS PIE IZQUIERDO**

**LIGAMETORROFIA DE LIGAMENTO DE LISFRANC**

**CAPSULORRAFIA DE 1ER METATARSIANO**

**VIA2:**

**REDUCCION ABIERTA MAS OSTEOSINTESIS DE 2DO Y 3ER METATARSIANO PIE IZQUIERDO**

**TENORRAFIA DEL TENDON DEL 2DO METATARSIANO**

**EXTRACCION DE CUERPOS LIBRES INTRAARTICULAES**

**LIGAMENTORRAFIA METATARSOFALANGICA DEL 3ER METATARSIANO”**

14. el médico tratante **EDUARDO CARLOS CONSTANTINO CARRILLO** adscrito al **CENTRO MEDICO INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S** de Cali, expide una nueva incapacidad medica al señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** por 30 días de duración desde el día 21 de febrero de 2020 hasta el día 21 de marzo de 2020

15.El día 30 de enero de 2019 el señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** presento derecho de petición a la **SECRETARIA DE MOVILIDAD** de Santiago de Cali (V), la cual le fue asignada la radicación Nro. 201941520100025652, con el fin de obtener “Certificación en la cual se indique: cantidad de accidentes registrados y ubicación de los mismos durante el año 2017 y 2018 en la avenida de las Américas entre calle 23B y 23C

16. La petición fue contestada por el **Subsecretario de Servicios de Movilidad Ricardo Herrera Álvarez.**

17. como consecuencia de la ocurrencia de accidente del cual fue víctima el Señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** resultó afectada su capacidad laboral, esto es un perjuicio irremediable. Cuando quiera que el acaecimiento de estos percances haga mella en su estado de salud y, por consiguiente, en su capacidad laboral.

18. El mantenimiento de la malla vial le corresponde a **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.**

19. El accidente del cual fue víctima el Señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** obedeció sin lugar a dudas, a la falta o falla en el servicio o en la administración, pues, correspondía al **Municipio de Santiago de Cali**, el adecuado mantenimiento de las vías municipales cuando las mismas presentan serias averías, colocar avisos preventivos advirtiendo que en la vía había huecos o forámenes.

20. La vía publica por la cual transitaba en su motocicleta de placa **ZIZ72D** a la altura de la Avenida 3 Norte con calle 23 B avenida las Américas de la ciudad Santiago de Cali, donde resultó lesionado el señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, no tenía ninguna señal de prevención que advirtiera a los conductores sobre el peligro que implicaba que la calle contaba con un hueco sobre la vía pública.

21. El accidente del cual fue víctima el señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** se debió a la falta de mantenimiento y señalización de la vía, obligación que estaba a cargo de la Entidad accionada, la cual deberá responder por los perjuicios a ellos causados.
22. En este caso, en los que la falta de dispositivos de señalización ha sido la causa determinante en la generación de accidentes de tránsito, cuando dicha obligación está a cargo de las Autoridades Administrativas.
23. Las características que deben tener las señales preventivas, esto es, las que tienen por objeto advertir al usuario de la vía sobre la existencia de una condición peligrosa.
24. El señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, para la fecha del accidente, obtenía una remuneración promedio mensual de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCT. (\$ 1.500.000)** salario mensual, producto de su trabajo como repartido de comida.
25. Durante el tiempo en que el señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, estuvo incapacitado, siempre estuvo atendido por su compañera permanente **ERIKA ALEJANDRA HUERTAS LEGUIZAMO** y su núcleo familiar, hoy demandante, los cuales conviven en la misma casa.
26. Las lesiones padecidas por el señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, generaron en el grupo familiar convocante angustia, dolor, tristeza y congoja, pues les conmocionó profundamente el gravísimo accidente sufrido por su familiar, y en especial las condiciones físicas y anímicas que tuvo que soportar.
27. En cumplimiento de la exigencia del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que creó el artículo 42 A de la Ley 270 de 1996; se presentó solicitud de conciliación vía electrónica en la página de la procuraduría general de la nación el día siete (07) de julio de 2020 y se le asignó el número de radicación E-2020-333336 al día 25 de agosto de 2020 la convocatoria de conciliación extrajudicial nunca se le asignó procurador.
28. En cumplimiento de la exigencia del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que creó el artículo 42 A de la Ley 270 de 1996; se presentó nueva solicitud de conciliación el día veinticinco (25) del mes de agosto del año 2020 la convocatoria de conciliación extrajudicial, la cual se llevó a cabo el día tres (03) del mes de noviembre del año 2020, declarándose fallida, como consta en acta que se anexa expedida por la Procuraduría 217 Judicial I para asuntos administrativos de Santiago de Cali.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

- Artículos 1, 2, 6, 24, 90 y 365 de la **Constitución Política de 1991.**

### Artículo 2:

“Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado”.

### En su artículo 90, reza:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

- Artículos, 140 de la **Ley 1437 de 2011.**
- **Ley 769 de 2002** "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". Artículos 1, 2, 110, 111 y 112

**ARTÍCULO 110. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES.** Clasificación y definición de las señales de tránsito:

*Señales reglamentarias:* Tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta que se sancionará conforme a las normas del presente código.

*Señales preventivas:* Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

*Señales informativas:* Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

Señales transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.

PARÁGRAFO 1o. Las marcas sobre el pavimento constituyen señales de tránsito horizontales. Y sus indicaciones deberán acatarse.

PARÁGRAFO 2o. Es responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de las señales de tránsito en los perímetros urbanos inclusive en las vías privadas abiertas al público. Las autoridades locales no podrán ejecutar obras sobre las vías públicas sin permiso especial de las autoridades de tránsito que tendrán la responsabilidad de regular los flujos de tránsito para que no se presenten congestiones.

Para la ejecución de toda obra pública que genere congestiones, la autoridad de tránsito local deberá disponer de reguladores de tráfico. Su costo podrá calcularse dentro del valor de la obra y la vigencia de la vinculación podrá hacerse durante el plazo del contrato de obra respectivo.

**ARTÍCULO 111. PRELACIÓN DE LAS SEÑALES.** La prelación entre las distintas señales de tránsito será la siguiente:

Señales y órdenes emitidas por los agentes de tránsito.

Señales transitorias.

Semáforos.

Señales verticales.

Señales horizontales o demarcadas sobre la vía.

**ARTÍCULO 112. DE LA OBLIGACIÓN DE SEÑALIZAR LAS ZONAS DE PROHIBICIÓN.** Toda zona de prohibición deberá estar expresamente señalizada y demarcada en su sitio previa decisión del funcionario de tránsito competente. Se exceptúan de ser señalizadas o demarcadas todas aquellas zonas cuyas normas de prohibición o autorización están expresamente descritas en este código.

- **LEY 1383 DE 2010** “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones” Artículo 1

**Artículo 1º.** Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público.

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código.

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.

- **Código Civil** Artículos 678, 2357 y 2356.

**ARTICULO 678. USO Y GOCE DE BIENES DE USO PÚBLICO.** El uso y goce que para el tránsito, riesgo, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos,

corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes.

**ARTICULO 2356. <RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA>.**

Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

Son especialmente obligados a esta reparación:

1. El que dispara imprudentemente un arma de fuego.
2. El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche.
3. El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino.

**ARTICULO 2357. <REDUCCION DE LA INDEMNIZACION>.** La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.

- **La resolución No. 5246 de 1985** proferida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte - hoy Ministerio de Transporte - “por la cual se adopta como reglamento oficial el Manual sobre Dispositivo para control de Tránsito en calles y carreteras”, estableció en su primer considerando: “que la señalización de las calles y carreteras es un aspecto de gran importancia para la seguridad vial del país...”. Lo cual significa o comporta que la adecuada y debida señalización tiene una importancia mayúscula para el desempeño de las actividades de control de tránsito automotor. No se trata simplemente de una competencia facultativa o discrecional en cuanto a su ejercicio, por parte de las autoridades de tránsito, son potestades de imperativo desarrollo, en la medida en que la disposición de dichas señales es un elemento insustituible de la seguridad vial del país.

**La resolución No. 8408 de 1985**, establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizar en las calles y carreteras. La pluralidad misma de señales temporales, ordenada por esta resolución, en los sitios de peligro en las vías públicas, revela el interés del legislador, y de la propia entidad administrativa, por la seguridad de los usuarios de los medios de transporte terrestre.”

## CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

### 1. Fundamento de la responsabilidad patrimonial de las instituciones públicas.

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas, con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que concuerda con el artículo 2 en su inciso 2 que determina “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El artículo 90 de nuestra Constitución Política señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. La última parte de este inciso hace alusión a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas.

El Honorable Consejo de Estado ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”

Este medio de Control (reparación Directa), es la típica de responsabilidad extracontractual, derivada de la actividad de la Administración, cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política -**CLAUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO**-, que estipula:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este"

Estas disposiciones son la traducción del Principio de Responsabilidad del Poder Público, que junto al Principio de Legalidad, constituyen los dos pilares del sistema de garantías de los administrados:

- A. El Estado debe actuar dentro del marco legal que delimita sus actuaciones; y
- B. Cuando ocasiona un daño antijurídico, debe repararlo.

Nuestra Constitución Política en el citado artículo 90 enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un daño antijurídico que le sea imputable.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de justicia, equidad, solidaridad, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación está dentro de los marcos de la licitud.

Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los daños antijurídicos. El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad.

La responsabilidad patrimonial del Estado observada desde el punto de vista del daño antijurídico se centra en la posición jurídica de la víctima al momento de sufrir el daño, con sus derechos y deberes: *su derecho a no ser lesionada injustamente, antijurídicamente, su derecho a no verse sometida a una carga especial anormal que destruya la igualdad de su situación frente a los demás ciudadanos.*" (Cursiva propia).

En el caso que nos ocupa es evidente la falla de la entidad acusada, pues a ella le corresponde el debido mantenimiento de la capa asfáltica de la vía pública, donde ocurrió el accidente, por ende, es su obligación revisar y corregir las imperfecciones de la vía pública.

La seguridad de los usuarios de las vías públicas es uno de los deberes propios de las administraciones territoriales, dentro de las finalidades que se propenden está el contar con unas vías eficientes y tranquilas para su tránsito, además de ser una razonada contraprestación a favor del beneficiario que tributa.

Como se demostrará en el transcurso del pleito judicial el incidente tuvo una causa directa y eficiente: el mal e irregular estado de la malla vial, el cual desencadenó que **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** perdieran la estabilidad y control de su cuerpo, e impactaran contra el pavimento, con el nefasto desenlace ya conocido.

Así entonces, si es deber de la institución municipal la conservación y mantenimiento de las vías públicas, el acontecimiento generador del perjuicio tuvo una causa exclusiva: simplemente la omisión de las estadidades al realizar el mantenimiento de la malla vial de la ciudad. Esto significa, que el primer elemento constitutivo de la falla del servicio, la existencia del hecho irregular, está expresándose fehacientemente.

Ya de vieja data se ha proferido sentencias reiterando la obligación indemnizatoria a cargo del estado por la omisión en el cumplimiento de dicho deber:

*“El mantenimiento de una vía pública es obligación oficial que consiste en realizar permanentemente sobre ellas todas las obras y trabajos necesarios para que preste satisfactoriamente el servicio a que está destinada. Es deber del Estado (municipio, Departamento, Nación, etc.), velar en todo momento por esta misión y su cumplimiento, que no solo es instrumento material para realizar el derecho de tránsito o desplazamiento de un sitio a otro, que la ley garantiza a todas las personas, sino además, como una compensación razonable y justa para quienes con el cumplimiento de las cargas tributarias, han adquirido el derecho a un correcto funcionamiento de los servicios públicos. Normalmente el ejercicio del derecho de transitar no tiene por qué implicar riesgos diferentes de los que son inherentes a fallas de la conducta humana, o sea, de lo que pueden concebirse como independientes de la tarea del Estado respecto del instrumento para realizarlo, que son las vías de comunicación colocadas legal o convencionalmente bajo su responsabilidad. Esta supone un empeño constante para mantenerlas en tal estado de buen funcionamiento, que ni la integridad ni la vida de los transeúntes corra peligro alguno derivado de imperfecciones, daños o desperfectos, carencia de medidas cautelares u otro hecho semejante.”<sup>1</sup>*

Las pruebas aportadas demuestran claramente que las lesiones que hoy padece **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, tienen como causa exclusiva el mal estado de la vía pública.

Esto demuestra de forma contundente que el hecho ha sido la causa eficiente del daño causado a los reclamantes, en otros términos, evidencia claramente la relación causal entre la omisión o irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá imponerse a la institución el deber de resarcir toda lesión o perjuicio originado a mis mandantes.

### **1.1 RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO - Tránsito de las obligaciones que se encuentran a cargo del Estado**

La Sala, de tiempo atrás, ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual.<sup>2</sup>

La falla del servicio se traduce en una trasgresión de las obligaciones que se encuentran a cargo del Estado, por lo que, el análisis frente al caso particular que se juzga debe realizarse en consideración a las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama.

En armonía con lo expuesto huelga concluir que el presente asunto habrá de resolverse bajo los parámetros de la falla del servicio.

### **1.2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Artículo 90 Constitución Política / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO -Daño antijurídico.**

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,

<sup>1</sup> Sentencia del 22 de septiembre de 1966. A.C.E año XLI, Tomo LXX y LXXI, No. 409-412.

<sup>2</sup> Esta posición ha sido reiterada en varias providencias a saber: Sentencias de 13 de julio de 1993, Exp. No. 8163; 30 de noviembre de 2006, M.P. Alir E. Hernández Enríquez, Exp. 16626; 18 de octubre de 2007, M.P. Mauricio Fajardo, Exp. 15528; 19 de junio de 2008, M.P. Miriam Guerrero, Exp. 15263

en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que, en casos como el que es objeto de estudio en el presente asunto, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional. Es evidente que la responsabilidad del Estado a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual como lo ha venido sosteniendo en forma reiterada esta Sala, estableció sólo dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico.<sup>3</sup>

Así mismo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha asumido la anterior posición en reiteradas ocasiones<sup>4</sup>, en la cual se ha puntualizado recientemente, entre otros aspectos, lo siguiente:

"De manera tal que "la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable"<sup>5</sup>.

"El elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado a la luz el artículo 90 constitucional es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas, aspecto en el cual también ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Corporación y tratado profusamente por el Consejo de Estado. Esta última autoridad judicial ha sostenido que la imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto en ciertos eventos se produce una disociación entre tales conceptos, razón por la cual para imponer al Estado la obligación de reparar un daño "es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además de la imputatio facti"<sup>6</sup>

"La Corte Constitucional ha, de esta manera, reiterado las consideraciones del Consejo de Estado sobre los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, tribunal que ha resumido su criterio en los siguientes términos:

"Son dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas.

La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar."<sup>7</sup>Cursivas fuera de texto

"Esta última cita es pertinente para recalcar en la cuestión objeto de estudio en la presente decisión, pues tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin hacer distinciones en cuanto al causante del daño."

## **2. RÉGIMEN SUBJETIVO. RÉGIMEN DE LA FALLA DEL SERVICIO PARA DERIVAR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.**

Ahora debemos precisar los aspectos que nos llevan indefectiblemente a responsabilizar a la entidad pública de los perjuicios originados a las demandantes, pues como se logrará demostrar en el devenir del proceso, esto es atribuible a la falla de la administración pública territorial, en quien concurren los elementos constitutivos del régimen de falta como generadora del deber resarcitorio a cargo del Estado.

Para ello resulta indispensable que tengamos en cuenta lo que jurisprudencialmente se han destacado como los requisitos para la constitución de la falla administrativa:

<sup>3</sup> Fallo 19707 de 2011 Consejo de Estado.

<sup>4</sup> Ver, entre otras, las sentencias: C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-533 de 1996; C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto

<sup>5</sup> 15 Sentencia C-533 de 1996.

<sup>6</sup> Consejo de Estado. Sentencia de 13 de julio de 1993.

<sup>7</sup> Sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995, Expediente 8118, Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.

*“Cuando el Estado, en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada **“FALTA O FALLA DEL SERVICIO”**, o mejor aún falta o falla de la administración, trátase de simples actuaciones, omisiones hechos y operaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y se requiere:*

*a) Una falta o fallas del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración;*

*b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;*

*c) Un daño, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc., y*

*d) Una relación causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...”<sup>8</sup>*

En el caso que nos ocupa es evidente la falla de la entidad acusada, pues a ella le corresponde el debido mantenimiento de la capa asfáltica de la vía pública, el mantenimiento de las rejillas y tapas de los alcantarillados públicos donde ocurrió el accidente, por ende, es su obligación revisar y corregir las imperfecciones de la vía pública.

La seguridad de los usuarios de las vías públicas es uno de los deberes propios de las administraciones territoriales, dentro de las finalidades que se propenden está el contar con unas vías eficientes y tranquilas para su tránsito, además de ser una razonada contraprestación a favor del beneficiario que tributa.

Como se demostrará en el transcurso del pleito judicial el incidente tuvo una causa directa y eficiente: el mal e irregular estado de la malla vial, el cual desencadenó que **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** perdieran la estabilidad y control de su cuerpo, e impactaran contra el pavimento, con el nefasto desenlace ya conocido.

Así entonces, si es deber de la institución municipal la conservación y mantenimiento de las vías públicas, el acontecimiento generador del perjuicio tuvo una causa exclusiva: simplemente la omisión de las estadidades al realizar el mantenimiento de la malla vial y alcantarillas de la ciudad. Esto significa, que el primer elemento constitutivo de la falla del servicio, la existencia del hecho irregular, está expresándose fehacientemente.

Ya de vieja data se ha proferido sentencias reiterando la obligación indemnizatoria a cargo del estado por la omisión en el cumplimiento de dicho deber:

*“El mantenimiento de una vía pública es obligación oficial que consiste en realizar permanentemente sobre ellas todas las obras y trabajos necesarios para que preste satisfactoriamente el servicio a que está destinada. Es deber del Estado (municipio, Departamento, Nación, etc.), velar en todo momento por esta*

---

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia octubre 28 de 1976.

*misión y su cumplimiento, que no solo es instrumento material para realizar el derecho de tránsito o desplazamiento de un sitio a otro, que la ley garantiza a todas las personas, sino además, como una compensación razonable y justa para quienes con el cumplimiento de las cargas tributarias, han adquirido el derecho a un correcto funcionamiento de los servicios públicos. Normalmente el ejercicio del derecho de transitar no tiene por qué implicar riesgos diferentes de los que son inherentes a fallas de la conducta humana, o sea, de lo que pueden concebirse como independientes de la tarea del Estado respecto del instrumento para realizarlo, que son las vías de comunicación colocadas legal o convencionalmente bajo su responsabilidad. Esta supone un empeño constante para mantenerlas en tal estado de buen funcionamiento, que ni la integridad ni la vida de los transeúntes corra peligro alguno derivado de imperfecciones, daños o desperfectos, carencia de medidas cautelares u otro hecho semejante.”<sup>9</sup>*

El relato de quienes observaron el suceso, serán claros y diáfanos en manifestar que las lesiones que hoy padece **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** tienen como causa exclusiva el mal estado de la vía pública.

Esto demuestra de forma contundente que el hecho ha sido la causa eficiente del daño causado a los reclamantes, en otros términos, evidencia claramente la relación causal entre la omisión o irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto, al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá imponerse a la institución el deber de resarcir toda lesión o perjuicio originado a mis mandantes.

## 2.1. EL HECHO IRREGULAR.

El Consejo de Estado, ha sostenido que el Estado es responsable por los daños antijurídicos causados a los ciudadanos como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas, siempre que estos daños le sean imputables, lo que implica que el Estado no responde por todos los daños antijurídicos que sufran las personas, causados por terceros, por cuanto sus obligaciones son relativas al estar limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan.

En efecto, para atribuir responsabilidad al Estado, es preciso demostrar que el daño le es imputable a éste, siendo posible en algunos eventos, que la imputabilidad resulte del incumplimiento por parte de la Administración de su deber de protección.

“El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles.

Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la Corporación, bajo dos títulos básicos: de responsabilidad subjetiva por falla del servicio y de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño bien de manera exclusiva, o concurrente con la de la víctima o de un tercero. Tales criterios están vinculados, obviamente, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del Estado, por haber sido éste su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo propiciado.

---

<sup>9</sup> Sentencia del 22 de septiembre de 1966. A.C.E año XLI, Tomo LXX y LXXI, No. 409-412.

Los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a éste, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados; o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado.

## **DEBER DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL – PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL**

**CONSEJO DE ESTADO** se pronunció mediante providencia del 5 de noviembre de 2009, Expediente 2003 - 0357-01, en la cual se expresó:

“... Procede la Sala en primer lugar a determinar a quién le corresponde el deber de mantenimiento de la infraestructura vial, en el presente caso del Municipio de Cali, para lo cual se permite traer a colación el pronunciamiento que respecto del tema el H. Consejo de Estado realizó el 11 de mayo de 2006, con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra quien en esa oportunidad expresó:

“En relación con el deber de mantenimiento de la infraestructura vía, ha dicho la Sala que la conservación de carreteras significa el mantenimiento rutinario y periódico de las diferentes carreteras nacionales:

"El mantenimiento consiste en las actividades necesarias para conservar el patrimonio invertido en una carretera en condiciones aceptables de funcionabilidad, dentro de ciertos límites de deterioro, lo más cercano al estado en que tenían en el momento de su construcción o de su última rehabilitación o mejoramiento. El mantenimiento periódico es el que requiere una carretera ocasionalmente o con una periodicidad superior a un año, para conservar el patrimonio vial dentro de ciertos límites de aceptación para la operación vehicular. El mantenimiento rutinario es el que se realiza en las zonas aledañas a la calzada de la carretera, comprende, entre otras actividades, la poda, corte y retiro de árboles".

La responsabilidad del Estado por omisiones en el deber de mantenimiento de las carreteras ha sido deducida por la Sala, para cuando se demuestra, por ejemplo, que las condiciones naturales del terreno, conocidas con anterioridad por las entidades demandadas, hacían previsible el desprendimiento de materiales de la montañas aledañas a las carreteras y éstas no tomaron las medidas necesarias para evitar una tragedia, o se demuestra que habiéndose dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal, no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas, o cuando se demuestra que unos escombros permanecieron abandonados en una carretera durante varios meses, sin que fueran objeto de demolición por INVIAS para el restablecimiento de la circulación normal de la vía. En síntesis, la sola demostración de la ocurrencia de un derrumbe o caída de piedras en una vía, por sí sola no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños que con tal situación se causan, a esa prueba debe unirse la de la imputabilidad del daño al Estado, que no es otra que la demostración de que el hecho que causó el daño se produjo como consecuencia de la omisión en que incurrió la entidad, en su deber de mantenimiento de las vías, o de alguna actuación con la cual se haya causado el daño ... "

## **OBLIGACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LAS VÍAS PÚBLICAS**

En ese sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, se ha manifestado en los siguientes términos:

*“La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8 del decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1 inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción con un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos, en efecto se ha dicho:*

*‘Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.*

*‘La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 1970. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.*

*‘El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: Señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza de este”. Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas.*

*‘La resolución No. 5246 de 1985 proferida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte - hoy Ministerio de Transporte - “por la cual se adopta como reglamento oficial el Manual sobre Dispositivo para control de Tránsito en calles y carreteras”, estableció en su primer considerando: “que la señalización de las calles y carreteras es un aspecto de gran importancia para la seguridad vial del país...”. Lo cual significa o comporta que la adecuada y debida señalización tiene un importancia mayúscula para el desempeño de las actividades de control de tránsito automotor. No se trata simplemente de una competencia facultativa o discrecional en cuanto a su ejercicio, por parte de las autoridades de tránsito, son potestades de imperativo desarrollo, en la medida en que la disposición de dichas señales es un elemento insustituible de la seguridad vial del país. La resolución No. 8408 de 1985, establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizar en las calles y carreteras. La pluralidad misma de señales temporales, ordenada por esta resolución, en los sitios de peligro en las vías públicas, revela el interés del legislador, y de la propia entidad administrativa, por la seguridad de los usuarios de los medios de transporte terrestre.”<sup>10</sup>*

## SEÑALES DE TRANSITO - Objeto / SEÑALES PREVENTIVAS - Naturaleza jurídica

<sup>10</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de octubre 4 de 2007. Exp: 16.058 y 21.112 acumulados. CP. Enrique Gil Botero.

Las características que deben tener las señales preventivas, esto es, las que tienen por objeto advertir al usuario de la vía sobre la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de ésta, están definidas en la LEY 769 DE 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". En el CAPITULO XII. Que se denomina SEÑALES DE TRÁNSITO

*“ARTÍCULO 110. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES. Clasificación y definición de las señales de tránsito:*

*Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.*

*Señales transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.”<sup>11</sup>*

## OBLIGACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LAS VÍAS PÚBLICAS

En ese sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, se ha manifestado en los siguientes términos:

*“En casos como este, en los que la falta de dispositivos de señalización ha sido la causa determinante en la generación de accidentes de tránsito, cuando dicha obligación está a cargo de las Autoridades Administrativas, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:*

*“Para la Sala, la seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción como un derecho fundamental; y todos ellos se acompañan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos en efectos se ha dicho:*

*‘Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.*

*‘La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 1970. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.”<sup>12</sup>*

*“Puede concluirse que en el sub lite hubo incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Administración y de la falta de normas de señalización preventivas en el lugar de los hechos, circunstancia frente a la cual el daño antijurídico sufrido por los demandantes como consecuencia de las lesiones padecidas por el señor*

<sup>11</sup> LEY 769 DE 2002 (Agosto 6) "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". Artículo 110

<sup>12</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de julio de 2008, expediente 17.163

*Fabio Enrique Prado Angulo, resulta imputable a las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, toda vez que a éstas les correspondía el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado, incluyendo los sumideros y el cambio de las respectivas tapas y cámaras, así como la señalización en el lugar de los hechos, de manera que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, constituye una falla en la prestación del servicio que se erige en factor determinante de los daños causados y, por ende, dicha entidad deberá responder por los perjuicios causados a los demandantes, tal como lo solicitó acertadamente el Ministerio Público y lo decidió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.*"<sup>13</sup>

**LEY 769 DE 2002 (agosto 6)"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".**

Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 769 de 2002, Modificado por el art. 1, Ley 1383 de 2010. Quedará así:

***“Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios.** Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.*

*En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público.*

*Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.*

*Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código.*

*Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.*"<sup>14</sup>

***“ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES.** Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:*

***Licencia de conducción:** Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional.*

***Señal de tránsito:** Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías.*

***Señales luminosas de peligro:** Señales visibles en la noche que emiten su propia luz, en colores visibles como el rojo, amarillo o blanco.*"<sup>15</sup>

Para lo cual se permite traer a colación el pronunciamiento que respecto del tema el H. Consejo de Estado realizó el 11 de mayo de 2006, con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra quien en esa oportunidad expresó:

*“En relación con el deber de mantenimiento de la infraestructura vía, ha dicho la Sala que la conservación de carreteras significa el mantenimiento rutinario y periódico de las diferentes carreteras nacionales:*

<sup>13</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE (E ): GLADYS AGUDELO ORDOÑEZ Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011) Expediente: 19.973 (R-3931) Actor: Fabio Enrique Prado Angulo y otros Demandados: Municipio de Cali - Empresas Municipales de Cali, EMCALI

<sup>14</sup> LEY 769 DE 2002 (Agosto 6)"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones" Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 769 de 2002, Modificado por el art. 1, Ley 1383 de 2010.

<sup>15</sup> LEY 769 DE 2002 (Agosto 6)"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones" ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES.

*"El mantenimiento consiste en las actividades necesarias para conservar el patrimonio invertido en una carretera en condiciones aceptables de funcionabilidad, dentro de ciertos límites de deterioro, lo más cercano al estado en que tenían en el momento de su construcción o de su última rehabilitación o mejoramiento. El mantenimiento periódico es el que requiere una carretera ocasionalmente o con una periodicidad superior a un año, para conservar el patrimonio vial dentro de ciertos límites de aceptación para la operación vehicular. El mantenimiento rutinario es el que se realiza en las zonas aledañas a la calzada de la carretera, comprende, entre otras actividades, la poda, corte y retiro de árboles".<sup>16</sup>*

Es importante resaltar en el presente asunto la ausencia de mantenimiento de las vías públicas, indican el comportamiento omisivo que genera la responsabilidad demandada del **Municipio de Cali**.

Es claro que es deber primordial de las autoridades en cualquier orden el de preservar el derecho fundamental de vida, honra y bienes de sus asociados, y dentro de ese rango, se ha de realizar todo aquello que preserve el bien superior.

En la noción de las cargas públicas y del deber de soportarlas, no se encuentra la opción del sacrificio o riesgo de la vida. El estado irregular de la capa asfáltica de una vía, el mantenimiento de las rejillas y tapas de los alcantarillados públicos por efecto del tiempo y uso, no denota más que falta de mantenimiento rutinario y cuidado de ésta, generando riesgos para la comunidad, en especial, para quienes transitan por ella.

## 2.2 LA CAUSALIDAD E IMPUTABILIDAD.

Nuestra jurisprudencia ha decantado a partir de la lectura del artículo 90 constitucional que la responsabilidad patrimonial de una institución pública, deberá tenerse por probado el daño antijurídico y que éste pueda imputarse a la entidad acusada.<sup>17</sup>

**"La imputación** exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada–; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal–; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. (...) Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las "estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas". En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que "parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones". Siendo esto así, **la imputación objetiva implica la "atribución", lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción.** Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de "cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta". (...). Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: "Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro". (...) la responsabilidad

<sup>16</sup> H. Consejo de Estado realizó el 11 de mayo de 2006, con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra

<sup>17</sup> Con anterioridad a esta interpretación, la doctrina y la jurisprudencia descansó el concepto de responsabilidad en la existencia de tres elementos, el hecho, el daño y el denominado nexo de causalidad.

extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico)”<sup>18</sup> (resaltado fuera de texto)

Podemos definir el *nexo causal* como la relación que debe existir entre el comportamiento o conducta del agente y el resultado desfavorable producido; esta confrontación causal tiene que hacerse a través de un estudio retrospectivo donde se tienen en cuenta los sucesos acaecidos que se considera han sido el antecedente de la consecuencia producida, teniendo siempre presente que en este proceso cada antecedente es un eslabón más de la cadena causal que ha intervenido en la generación del hecho que se investiga, en otros términos lo que se busca es demostrar la presencia de un vínculo necesario entre un antecedente (causa) y un consiguiente (efecto).

Por consiguiente, para lograr establecer la causa en el evento sub-lite, debemos acudir a lo que debió realizar la institución convocada, es decir el cumplimiento de sus funciones reglamentarias, que de haberse realizado se hubiese anticipado la decisión de no permitir la distribución y comercialización evidencia claramente la relación causal entre la omisión o irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá instarse a la institución pública y a la privada el deber de resarcir toda lesión a bien jurídico o perjuicio originado a nuestros mandantes.

### 3. CONCLUSIÓN.

El accidente del cual fue víctima **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** se debió a la falta de mantenimiento y señalización preventiva de la vía, obligación que estaba a cargo de la entidad accionada. La vía publica por la cual transitaba en su motocicleta placas placa ZIZ72D a la altura de la calle Avenida 3 Norte con calle 23 B avenida las Américas de la ciudad Santiago de Cali (V), donde resultó lesionado **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, no tenía ninguna señal de prevención que advirtiera a los conductores sobre el peligro que implicaba que la calle contaba con el mal estado de la maya vial.

En este caso, en los que la falta de dispositivos de señalización ha sido la causa determinante en la generación de accidentes de tránsito, cuando dicha obligación está a cargo de las Autoridades Administrativas.

### RESPONSABILIDAD DE LAS DEMANDADAS MUNICIPIO DE CALI.

Teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el plenario de las cuales se constata la ocurrencia de los hechos objeto de la presente demanda, es importante resaltar en el presente asunto la ausencia de mantenimiento de las vías públicas, indican el comportamiento omisivo que genera la responsabilidad demandada del Municipio de Cali.

Es claro que es deber primordial de las autoridades en cualquier orden el de preservar el derecho fundamental de vida, honra y bienes de sus asociados, y dentro de ese rango, se ha de realizar todo aquello que preserve el bien superior.

**En la noción de las cargas públicas v del deber de soportarlas, no se encuentra la opción del sacrificio o riesgo de la vida. El estado irregular de la capa asfáltica de una vía, por efecto del tiempo v uso, no denota más que falta de mantenimiento rutinario v cuidado de ésta, generando riesgos para la comunidad, en especial, para quienes transitan por ella.**

---

<sup>18</sup> Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del veinticinco (25) de julio de dos mil once (2011), radicación número: 25000-23-26-000-1998-00731-01(19434), Actor: Luis Enrique Ruiz Quiroga y otros vs Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

El actuar omisivo por parte de las entidades demandadas como lo es la falta de señales preventivas en el lugar del accidente

Las señales preventivas se definen como aquellas orientadas a advertir al usuario la existencia de una situación peligrosa y su naturaleza, y allí mismo se contempla que cuando el peligro es temporal, la señal debe ser retirada de la vía una vez cesen las condiciones que dieron lugar a su instalación.

Sobre este tema la doctrina ha establecido que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa, comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado, de tal suerte que no basta con la construcción y mantenimiento de las vías, sino que también está a su cargo la función de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros y por tanto debe responder por la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, y su consecuente inseguridad<sup>19</sup>

De acuerdo a lo analizado es **Municipio de Cali** a quien le corresponde el mantenimiento y cuidado de la malla vial de la ciudad, lo anterior por cuanto el hecho se generó en una vía de la ciudad de Cali.

### MEDIO DE CONTROL QUE SE EJERCERÍA

Reparación Directa.

### C U A N T I A

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 157 de la ley 1437 de 2011, que indica que la cuantía se determinará, tratándose de varias pretensiones; por el valor de la pretensión mayor, nos permitimos estimar razonadamente la cuantía en la suma de **SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINTO SESENTA PESOS (\$70.224.160) POR CONCEPTO DE DAÑO A LA SALUD**

### R E L A C I O N   D E   P R U E B A S

Solicitamos al Juez de Conocimiento, de conformidad con el artículo 162 numeral 5 de la ley 1437 de 2011, se tengan como medios de prueba los siguientes documentos aportados con la demanda:

#### I PRUEBAS DOCUMENTALES:

- Copia del registro civil de **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA.**
- Copia del registro civil de **JULIANA CESPEDES MAZUERA.**
- Extrajudio de **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA y ERIKA ALEJANDRA HUERTAS LEGUIZAMO**
- Copia de la historia clínica 8704 suscrita por los paramédicos de adscritos a CUIDADO DE VIDA S.A.S
- Copia de derecho de petición elevado a **LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.**
- Respuesta de la petición elevada a la secretaria de movilidad.
- Copia de la historia clínica del señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA.**
- Fotografías del lugar del accidente
- Constancia de conciliación radicada vía sede electrónica con numero de radicación E-2020-333336
- Constancia y acta de conciliación del procurador 217

---

<sup>19</sup> Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, cuarta edición, Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2010, p. 377.

## II PRUEBAS TESTIMONIAL:

A. Solicitamos al señor H. Juez de Conocimiento se sirva citar y escuchar en declaración a las siguientes personas, quienes depondrán sobre las relaciones afectivas de **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA**, con los demás demandantes, así como respecto de los perjuicios irrogados a los reclamantes y demás interrogantes que surjan en el desarrollo de la diligencia. Los daños inmateriales ocasionados a los demandantes.

- **CAROLINA GONZÁLEZ OSORIO**, mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.113.527.816

Quien podrá ser notificada vía correo electrónico: [osoriocarito6@gmail.com](mailto:osoriocarito6@gmail.com)

- **CAMILO ESTEBAN MONCADA GIRALDO**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.144.151.677

Quien podrá ser notificado vía correo electrónico: [Caesmo91@hotmail.com](mailto:Caesmo91@hotmail.com)

- **SEBASTIAN PENAGOS MONTAÑO**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.075.273.727

Quien podrá ser notificado vía correo electrónico: [spenagos818@gmail.com](mailto:spenagos818@gmail.com)

Quienes podrán ser notificados por medio del suscrito apoderado que la recibirá en el calle 32 # 78-51 - Santiago de Cali, , celular 3176443308 [diegofelipecm@hotmail.com](mailto:diegofelipecm@hotmail.com)

B. Solicitamos al señor H. Juez de Conocimiento se sirva citar y escuchar en declaración a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los hechos en tiempo, modo y lugar del accidente donde se vio involucrado el Señor **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** y demás interrogantes que surjan en el desarrollo de la diligencia.

- **TIBOR ERICK KOMAROMI HERNANDEZ**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.144.164.136

Quien podrá ser notificado vía correo electrónico: [tiborkomaromi3@gmail.com](mailto:tiborkomaromi3@gmail.com)

- **GUSTAVO ADOLFO TORRES URBANO**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.143.830.881

Quien podrá ser notificado vía correo electrónico: [torresguason@outlook.com](mailto:torresguason@outlook.com)

- **HARVY LEON ERAZO DAZA**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 94.530.325

Quien podrá ser notificado vía correo electrónico: [harvyerazo\\_31@hotmail.com](mailto:harvyerazo_31@hotmail.com)

Quienes podrán ser notificados por medio del suscrito apoderado que la recibirá en el calle 32 # 78-51 - Santiago de Cali, celular 3176443308 [diegofelipecm@hotmail.com](mailto:diegofelipecm@hotmail.com)

## III PRUEBA PERICIAL.

A. Remitir a **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA (victima)**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.151.947.991. Al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santiago de Cali, ubicado en la calle 4 B No. 36-01; para que le sea practicado un reconocimiento médico y se sirvan determinar el tiempo de incapacidad y las secuelas físicas a que hubiera lugar aclarando si son de carácter permanente o transitorias, como consecuencia de los padecimientos físicos sufridos desde el día 25 de agosto de 2018

A través de experto del instituto de medicina legal y ciencias forenses, para que con fundamento en la historia clínica recibida de los centros hospitalarios se dé respuesta si cuentan con Secuelas: A) FISICAS Y B) PSICOLOGICAS.

La entidad tiene como correo electrónico las siguientes direcciones:

[drsuroccidente@medicinalegal.gov.co](mailto:drsuroccidente@medicinalegal.gov.co)

[notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co)

B. Solicito al H. Juez de Conocimiento se sirva remitir a **JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA** (victima), mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.151.947.991, a la Junta Regional de calificación de Invalidez del Valle del Cauca, para que determine cuál es el grado de pérdida de capacidad laboral que le generó las lesiones el día 25 de agosto de 2018

La entidad tiene sede en la Calle 5E # 42-44 Cali.

La entidad tiene como correo electrónico las siguientes direcciones:

[jrcivalle@emcali.net.co](mailto:jrcivalle@emcali.net.co)

[jrci.información@gmail.com](mailto:jrci.información@gmail.com)

## COMPETENCIA

Por haber ocurrido los hechos en jurisdicción del municipio de Santiago de Cali (V), de conformidad con la cuantía establecida, lo es competente el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali, como lo indica el numeral 6 del artículo 156 de la ley 1437 de 2011 y el Acuerdo 3321 de 2006

<sup>20</sup>.

## ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito aportar con el libelo de la demanda:

- Los documentos señalados en el acápite de RELACION DE PRUEBAS.
- CD contentivo de la demanda.
- Fotocopias de la demanda para el traslado de la entidad demandada, Ministerio Público, para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y para el archivo del despacho judicial.
- Poder otorgado a mi favor.
- Copia de la solicitud para el archivo del despacho.

## NOTIFICACIONES

A los Demandantes:

- Por intermedio del suscrito apoderado la recibirá en el calle 32 # 78-51 – Santiago de Cali, celular 3146047107. Al correo [diegofelipecm@hotmail.com](mailto:diegofelipecm@hotmail.com)

---

<sup>20</sup> Expedido por el Consejo Superior de la Judicatura “Por el cual se crean los circuitos judiciales administrativos en el territorio nacional”.

Al Demandado:

El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, entidad con domicilio en la Avenida 2norte #10 - 70 CAM. Cali - Valle del Cauca, representada por el señor alcalde de la ciudad **JORGE IVAN OSPINA** o quien esté haciendo sus veces en el momento de la demanda.

Notificaciones Judiciales: [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co)

De usted atentamente,



**DIEGO FELIPE CIFUENTES MARMOLEJO.**

C.C No. 1.107.047.945 de Cali

T.P No. 208.527 del Consejo Superior de la Judicatura.